



Decidir con evidencia: retos de Antioquia y Medellín para la acción pública

ANTIOQUIA

cómo vamos



MEDELLÍN

cómo vamos





INTRO- DUC- CIÓN

Antioquia Cómo Vamos y Medellín Cómo Vamos son programas creados y financiados por distintos representantes del sector privado, cuyo propósito es hacer seguimiento a la calidad de vida del departamento y la ciudad de manera rigurosa, objetiva e imparcial.

Medellín Cómo Vamos surge en 2006 y, desde entonces, se ha consolidado como una fuente clave de información para el análisis y la planeación de políticas públicas, a través de la publicación periódica de los Informes de Calidad de Vida y la Encuesta de Percepción Ciudadana. A partir de esta experiencia, en 2023 se creó Antioquia Cómo Vamos, el primer programa de este tipo con alcance departamental.

Conscientes de la importancia de conocer cómo vamos para saber hacia dónde vamos, el trabajo de ambos programas trasciende el seguimiento a la calidad de vida. Su labor también incluye la evaluación de las políticas públicas y la promoción de espacios de diálogo basados en evidencia, en los que el gobierno, la academia, el sector privado y la ciudadanía aporten al desarrollo del departamento y la ciudad.

El acceso a datos objetivos fortalece la capacidad de argumentación, fomenta el diálogo informado y promueve una participación crítica y consciente. De esta manera, la información de calidad se convierte en una herramienta clave para el fortalecimiento de la democracia y la toma de decisiones de política pública responsables.

En este marco, el presente documento tiene como propósito ofrecer insumos técnicos, claros y sustentados en evidencia que permitan identificar y visibilizar los principales retos que enfrentan actualmente Antioquia y Medellín. Asimismo, busca contribuir a la construcción de la agenda pública y servir como un recurso útil para las candidaturas, facilitando el análisis y el fortalecimiento de sus propuestas y planes de trabajo, con un enfoque en las necesidades regionales y una mirada de mediano y largo plazo orientada a la reducción de las desigualdades territoriales y a la anticipación de los cambios que marcarán el rumbo del departamento y la ciudad.



Retos de Antioquia 2026



En Antioquia se agudiza la violencia de las estructuras armadas ilegales y persiste la que padecen las mujeres en sus hogares

Antioquia es uno de los departamentos con mayor presencia y expansión de estructuras armadas ilegales, que actualmente tienen injerencia en al menos el 86% de sus municipios. Esta disputa por el control territorial y el dominio de rentas ilícitas —como la minería ilegal, el narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el tráfico de migrantes— detonó un recrudecimiento de la violencia en 2024: los enfrentamientos armados aumentaron un 55% y el accionar de estas estructuras fue la causa determinante del 85% de los homicidios en el departamento.

La violencia no se queda entre los ilegales. La fuerza Pública y la población están bajo presión. En 2024 las agresiones contra la Fuerza Pública en Colombia crecieron un 32% y Antioquia fue el departamento con más uniformados asesinados (22) y el tercero con más heridos (70).

La crisis humanitaria es histórica y persiste: cerca de 26 mil personas fueron desplazadas en 2024 y miles más fueron víctimas de amenazas, extorsiones, restricciones de movilidad y otros hechos victimizantes.

Frente a este escenario, si bien las autoridades territoriales y el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) han activado rutas de asistencia, la capacidad de respuesta reactiva resulta insuficiente ante la magnitud del conflicto. Es imperativo que se implementen acciones efectivas de seguridad a nivel nacional que garanticen el cese de la violencia y la protección real de la sociedad civil. Esto es fundamental para que las medidas de atención y reparación no sigan siendo necesarias para miles de personas cada año en el departamento.

La violencia en el departamento no se circumscribe al accionar de grupos armados o a la conflictividad callejera; permea la esfera privada con un impacto desproporcionado sobre las mujeres. La violencia basada en género mantiene una tendencia al alza sostenida desde la pandemia, registrando en 2024 un promedio alarmante de 65 casos diarios (22.947 en total). La gravedad de estas cifras se ve opacada por un subregistro estimado del 64%, alimentado por el miedo, la normalización de la agresión y, fundamentalmente, la desconfianza institucional.

Esta percepción de ineeficacia tiene un respaldo crítico en la realidad procesal: según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), la impunidad alcanza el 93% en casos que son archivados en etapa de indagación. Este vacío de justicia no solo perpetúa el silencio de las víctimas, sino que eleva el riesgo de feminicidio, evidenciando que la protección de la vida de las mujeres sigue siendo el desafío ético y de seguridad más apremiante para la institucionalidad.



Frente a este panorama, los retos para Antioquia son estructurales y deben abordarse de manera simultánea. En primer lugar, es imperativo desarticular las finanzas y la capacidad operativa del crimen organizado, golpeando estratégicamente las rentas ilícitas que oxigenan su poder. Sin embargo, la estrategia de control debe ir acompañada de una transformación territorial: se requiere generar alternativas de desarrollo sostenible en las zonas vulnerables, permitiendo que las economías lícitas compitan y desplacen a las ilegales como opción de vida digna.

Finalmente, resulta urgente cerrar la brecha de legitimidad entre el Estado y la ciudadanía. Esto implica fortalecer el tejido comunitario y garantizar un acceso real a la justicia que reduzca la impunidad. Solo integrando control territorial, inversión social y fortalecimiento institucional será posible transitar hacia una seguridad integral y sostenible, donde la convivencia y la protección sean derechos efectivos en todos los rincones de Antioquia.

Aumento en la inseguridad alimentaria refleja históricos en desnutrición aguda

La inseguridad alimentaria continúa siendo un reto en el departamento, el aumento de precios en los alimentos (+71%) desde la pandemia podría explicar la prevalencia.

La medición más reciente de la Escala de Experiencia de Inseguridad Alimentaria (FIES) realizada por el DANE muestra que en el último año en Antioquia la inseguridad alimentaria moderada o severa superó la cifra nacional y aumentó entre de 22% en 2023 a 28% en 2024, mientras en Colombia se mantuvo estable en 26% entre ambos años. Adicionalmente, el indicador es mayor en la ruralidad (33%) frente a los centros urbanos (27%), lo cual invita a la reflexión en torno al funcionamiento actual de los sistemas agroalimentarios en el departamento.

Si bien el acceso a una cantidad oportuna de alimentos es importante para un porcentaje importante de los hogares, la calidad de estos es fundamental para una base más amplia: la preocupación por los alimentos (41%), la falta de alimentos saludables (39%) y la poca variedad (36%), son las principales tres experiencias que reportan los hogares en el departamento, a 2024 el porcentaje de hogares que las experimenta aumentó entre 4 y 9 puntos porcentuales (p.p.).

En este mismo sentido, se identifica el mayor número de menores de cinco años con desnutrición aguda, pasando de 2.050 en 2023 a 2.547 durante 2024. A nivel subregional las alertas se concentran en Urabá (805,0), Magdalena Medio (686,6) y Nordeste (633,9), dado que superan el promedio departamental de 601 menores en esta condición por cada cien mil en la edad.



Si bien en todas las subregiones se registra un aumento en el porcentaje de hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa entre 2021 y 2023, las diferencias entre ellas se han profundizado. Mientras en Urabá, Bajo Cauca, y Magdalena Medio este indicador es superior al 50%, en Oriente y Suroeste no supera el 31%.

En este contexto, es necesario para Antioquia un sistema de información que permita estimar el número de tamizajes realizados a infantes en un año, tal como existe en Medellín. Sólo de esta forma se puede identificar si el aumento en la desnutrición es por mayores condiciones de vulnerabilidad o por un mejoramiento en la detección de los casos.

Crisis en el sistema de salud se refleja en la calidad y pertinencia de los servicios de atención

Actualmente, el sistema de salud en Colombia reporta uno de sus momentos más turbulentos en sostenimiento financiero. Según la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (2025), las EPS adeudan aproximadamente 20,3 billones de pesos a 225 instituciones que reportaron información a diciembre de 2024. En este año, el 92% de los afiliados del departamento se encontraba en alguna EPS intervenida o con retiro voluntario (cálculos propios a partir de Seccional de Salud de Antioquia - Gobernación de Antioquia).

Dicho contexto se traduce en afectaciones a la calidad de vida de la población. Mientras en 2021 el 34% afirmaba que la facilidad en el acceso era buena o muy buena, en 2023 esta cifra descendió al 30% (Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia – Gobernación de Antioquia).

Esta percepción negativa se puede encontrar sustentada en el aumento en el tiempo promedio de espera para la asignación de citas médicas, aún más al considerar que desde 2021, Antioquia ha alcanzado su máximo histórico, y en los últimos dos años, superó a Bogotá D.C. y al promedio nacional. En promedio, los habitantes de Antioquia deben esperar 2 días más que alguien que vive en Bogotá o Valle del Cauca, y 3 días más que alguien que vive en Atlántico o Bolívar (Informe sobre Goce Efectivo del Derecho a la Salud 2024 – Ministerio de Salud).

Por otro lado, se registra un aumento del 24% en los reclamos a las EPS frente a la Superintendencia de Salud, llegando a 273 mil en 2024, y del 47% en las tutelas por derecho a la salud presentadas a la Corte Constitucional, alcanzando los 54 mil. Los principales motivos tanto en los reclamos como en las tutelas se relacionan con la asignación de citas médicas y la entrega oportuna de medicamentos o insumos.

En definitiva, si bien el acceso al derecho a la salud se encuentra en entredicho de forma cada vez más frecuente en el país, Antioquia es uno de los departamentos más afectados por la problemática, desde aumento en los días de atención hasta históricos en tutelas y reclamos, son muestra de la necesidad de intervenciones locales que busquen mitigar los efectos de la crisis nacional en la calidad de vida de los habitantes del territorio.



Envejecimiento

Antioquia está envejeciendo más rápido de lo que se tenía estimado. Este envejecimiento está asociado al cambio demográfico, que en las últimas décadas ha estado marcado por una caída acelerada en la tasa de natalidad y de fecundidad acompañada de una tasa de mortalidad que se mantiene constante.

Una manera sencilla de evidenciar el envejecimiento de la población es comparar la proporción de niños y de adultos mayores dentro de la población, y su evolución a través de los años. En 1985, el 27% de la

población era menor de 12 años y solo el 7% tenía más de 60 años. En 2025, ambos grupos pesan lo mismo: 16% cada uno. Para 2050 la relación se invertirá: los adultos mayores representarán un 28% del total de la población y los niños menores de 12 años representarán un 9%. Oriente, Suroeste y Valle de Aburrá son las subregiones más envejecidas, pues actualmente más del 17% de su población es mayor de 60 años.

El envejecimiento se traducirá en un aumento de la dependencia económica, entendiéndola como la relación entre la población “dependiente” (menores de 15 años y mayores de 65 años) y la población “activa” (entre 15 y 64 años). A 2025, el índice de dependencia económica es del 45%, se espera que en los próximos 25 años alcance un máximo del 49%, alcanzando niveles similares a los del 2018. Sin embargo, la gran diferencia es que antes la alta dependencia económica se daba por el alto peso poblacional que tenían los más jóvenes, mientras que en el 2050 la alta dependencia económica será por el alto peso poblacional de los adultos mayores.

En el informe “Colombia Envejece: las oportunidades de una sociedad longeva”, se enfatiza en la importancia de fortalecer la educación a lo largo de la vida, a partir de la recapacitación y el reentrenamiento en habilidades de autogestión, trabajo con personas, solución de problemas y uso de tecnologías. Así mismo, recomienda aprovechar la digitalización y la inteligencia artificial para cerrar brechas en el aprendizaje e incluir productivamente a la población mayor (Fundación Saldarriaga Concha & Inclusión SAS, 2025).

Al respecto, otro cambio importante que se ha evidenciado en los últimos años es el aumento en la participación laboral de los adultos mayores en Antioquia, que entre el 2021 y el 2024 pasó del 25% al 30%. Este aumento puede responder tanto al deseo de mantenerse activos laboralmente como a la necesidad de generar ingresos ante la falta de una pensión.

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2022, el 55% de las personas manifestó no sentirse preparado económica y financieramente para enfrentar la vejez. Además, un 38% de las personas consideran que los servicios de cuidado que vaya a necesitar durante su vejez deben ser asumidos por las familias, mientras que un 31% no lo ha pensado.

Lo anterior cobra relevancia cuando vemos que otro de los cambios demográficos que se ha observado es la reducción en el tamaño de los hogares, cerca de la mitad de los hog-



res del departamento está compuesta por una o dos personas, lo que seguramente va a dificultar cada vez más la disponibilidad de la familia a ofrecer los servicios de cuidado para los adultos mayores en el futuro.

Es más, de acuerdo con la Encuesta de Calidad de Vida de Antioquia 2023, el 83% de las personas manifestó que los adultos mayores de su hogar no requieren cuidado, y del total de adultos mayores que lo requieren (aproximadamente 173.600), el 58% lo recibió de sus hijas y el 16% de sus hijos. Por otro lado, el 22% de los niños menores de 5 años son cuidados por sus abuelas o abuelos, lo que lleva a la necesidad de explorar con más detalle las implicaciones que el cambio demográfico traerá en la prestación del servicio de cuidado de los adultos mayores, y en este sentido abrir el debate sobre quien cuidará a los cuidadores.

Participación laboral con brechas y oportunidades

La participación laboral es el primer eslabón en el mercado laboral, el cual permite a las personas acceder a seguridad social, un ingreso digno y bienestar laboral. Este indicador se refiere al porcentaje de personas en edad de trabajar que se encuentran activas en el mercado laboral, es decir, aquellos que se están ocupados o que están buscando empleo, su análisis refleja las oportunidades y desigualdades presentes en el mercado laboral del departamento.

De acuerdo con cifras del DANE, en 2024 Antioquia registró una tasa global de participación del 63,8%. Si bien este indicador se mantuvo prácticamente inalterado frente a 2023, persisten brechas significativas a nivel territorial y de género. Al comparar con el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, donde la tasa alcanzó el 66,1%, se evidencian diferencias importantes entre hombres y mujeres. Mientras la participación laboral masculina fue del 76,3% en el Área Metropolitana y del 76,9% en el promedio departamental, la participación femenina se ubicó en 57,3% y 51,8%, respectivamente, lo que da cuenta de una brecha de género persistente.

La no participación en el mercado laboral responde a múltiples factores, que incluyen tanto limitaciones estructurales —como la escasez de oportunidades laborales o la desconexión entre la oferta y la demanda de trabajo— como condiciones personales y cargas de cuidado presentes en los hogares. En este contexto, para 2024 se identificaron 158.170 personas que no participaron en el mercado laboral pese a manifestar su disposición a trabajar; de este grupo, el 71% eran mujeres y el 67% se encontraba dedicado a oficios del hogar. De lograrse la integración efectiva de estas personas al mercado laboral, la tasa de participación podría aumentar hasta 78,1% para los hombres y 55,6% para las mujeres, reduciendo parcialmente las brechas existentes.



El principal reto, por tanto, consiste en identificar y remover las barreras que limitan la participación laboral, así como en acompañar a las personas en su proceso de inserción efectiva al empleo. Avanzar en esta dirección resulta fundamental, dado que la participación laboral constituye uno de los primeros pasos para mejorar las condiciones de vida de la población y fortalecer la inclusión económica en el territorio.

Alta informalidad por fuera del área metropolitana

La informalidad laboral en Antioquia es elevada y se intensifica por fuera del Área Metropolitana del Valle de Aburrá. Según cifras del DANE, la tasa de informalidad en el departamento para 2024 fue del 43,9%, proporción que asciende al 62,4% cuando se excluye el Área Metropolitana.

Al analizar estas dinámicas con mayor detalle, se evidencia que el principal problema estructural se concentra en los trabajadores independientes. En este grupo, el 96,2% reportó no cotizar al sistema de seguridad social, ya sea a salud o a pensión. De igual manera, el 86,3% ejerce su actividad económica sin contar con los registros requeridos ante una cámara de comercio o sin llevar una contabilidad formal de su negocio.

Dentro de este conjunto de definiciones de informalidad, ha cobrado especial relevancia la figura de los trabajadores del “rebusque”. Estos corresponden a trabajadores independientes que carecen de contrato laboral, no están afiliados al sistema de seguridad social y desarrollan actividades de baja especialización, las cuales, por sus características, son particularmente propensas a operar bajo esquemas no formales de contratación.

En el caso de Antioquia, en 2024 el 22,7% del total de los ocupados se encontraba trabajando bajo esta modalidad, lo que representó el 71,2% de los trabajadores independientes. Es importante destacar que esta proporción asciende al 83,2% en los territorios por fuera del Área Metropolitana. El peso de los trabajadores del “rebusque” evidencia que en gran parte del territorio el empleo funciona más como una estrategia de supervivencia que como un mecanismo de movilidad social. Esto limita el recaudo, debilita la sostenibilidad del sistema de protección social y restringe las posibilidades de desarrollo económico de largo plazo.

En este contexto, el gran desafío para Antioquia es transitar de economías locales basadas en el “rebusque” hacia esquemas productivos más formales, lo cual exige políticas diferenciadas por subregión, fortalecimiento empresarial, acompañamiento a los trabajadores independientes y una estrategia clara de formalización que vaya más allá del cumplimiento normativo y aborde las condiciones reales de productividad y acceso a ingresos estables.



Pertinencia en educación superior y reducción de la matrícula en formación técnica y tecnológica

Aunque entre 2023 y 2024 se registró un aumento del 2% en la matrícula de programas de pregrado, rompiendo la tendencia decreciente observada hasta 2023, Antioquia continúa enfrentando retos estructurales. Uno de los más relevantes es la creciente percepción de desconexión entre el estudio y el trabajo, ya que cerca del 70% de los jóvenes considera que su formación no guarda relación con su inserción laboral. Este desajuste se refleja también en la distribución de la matrícula por niveles de formación, donde se muestran disparidades.

Mientras la matrícula en programas universitarios aumentó en 8.182 estudiantes entre 2019 y 2024, la formación técnica y tecnológica registró una reducción de 28.241 estudiantes en el mismo periodo. Esta tendencia resulta especialmente preocupante, dado que este tipo de formación es clave para la provisión de mano de obra calificada, la rápida inserción al mercado laboral y el fortalecimiento de sectores productivos estratégicos, por lo que su debilitamiento puede limitar el desarrollo económico y la competitividad del departamento.

Para lograr la reducción en las brechas en términos de educación superior, es necesario dar un mayor fortalecimiento a la formación técnica y tecnológica no solo a nivel departamental sino también a nivel subregional, ya que este tipo de formación también es una opción educativa pertinente, alineada con las necesidades del mercado laboral.

Asimismo, es importante impulsar una mayor articulación entre las diferentes instituciones educativas, el sector empresarial y entidades públicas como el SENA, que garanticen la formación profesional necesaria, además de socializar e implementar programas educativos con más componentes prácticos y rutas claras de inserción laboral y continuidad hacia la educación universitaria.

Desde pandemia el sistema educativo aún no recupera la asistencia escolar

Desde 2019, tal como se había presentado en el Informe de Calidad de Vida de Antioquia Cómo Vamos 2024, la matrícula escolar en el departamento antioqueño mantiene una tendencia decreciente que no ha logrado revertirse tras seis años de la pandemia del COVID-19. Aunque entre 2019 y 2025 la población entre 5 y 16 años se redujo en 5,4% según proyecciones del DANE, la matrícula total cayó en mayor proporción, siendo esta reducción del 12,3%, lo que implica una variación neta negativa de 6,9 p.p. Esta reducción



se observa en todas las subregiones, pero es más marcada en Bajo Cauca, la cual presentó una reducción de 24,4%, seguida de Magdalena Medio, la cual fue de 22,1% y Nordeste, 20,6%.

Adicionalmente, al diferenciar por niveles educativos, es preocupante ver que el mayor retroceso se concentre en preescolar, con una caída de 27,3%, lo que sugiere barreras de acceso desde el primer año escolar y aumenta el riesgo de rezago y mayores dificultades en los ciclos posteriores, afectando el desarrollo educativo y la adquisición de aprendizajes.

Por su parte, en educación media, si bien la matrícula había aumentado y alcanzado su máximo en 2023, desde entonces se presenta también una disminución, y en los últimos dos años se redujo en 4.375 estudiantes, lo que representa un riesgo para la culminación del ciclo educativo y el tránsito hacia la educación superior.

Para revertir esta situación, se deben orientar mayores esfuerzos a la recuperación en la asistencia escolar, en especial en los municipios más afectados. Esto implica un mayor fortalecimiento en el acceso, especialmente en los grados de preescolar, buscar nuevas políticas para reducir las barreras que enfrentan las familias para acceder y permanecer en el sistema educativo y ampliar la oferta educativa en las subregiones más afectadas. También, es importante continuar con las estrategias de acompañamiento en educación media que apoyen la permanencia y finalización del ciclo educativo, facilitando el tránsito hacia la educación superior o la formación para el trabajo.

Se mantiene el bajo nivel de desempeño en lectura crítica, principalmente en zonas rurales

De acuerdo con el último Informe de Calidad de Vida de Antioquia Cómo Vamos 2024, el desempeño en comprensión lectora evidencia brechas frente a otros departamentos comparables. En la prueba de lectura crítica, Antioquia obtuvo un puntaje promedio de 52 puntos, ubicándose por debajo de Cundinamarca (54 puntos), Santander (55 puntos) y el Valle del Cauca (53 puntos). Estos resultados muestran que el departamento enfrenta dificultades para alcanzar niveles de desempeño similares a los de otras regiones con características comparables.

Además, al interior del departamento, la brecha se profundiza al comparar el desempeño entre zonas rurales y urbanas. Mientras que en las áreas urbanas cerca del 63% de los estudiantes alcanza las competencias mínimas en lectura crítica, en las zonas rurales esta proporción se reduce a aproximadamente el 41%, lo que representa una diferencia de 22 puntos porcentuales.



Esta brecha es considerablemente mayor que la observada en departamentos como Boyacá (15 p.p.), Santander (16 p.p.) y Valle del Cauca (11 p.p.). Aunque el desempeño urbano de Antioquia es similar al de estos departamentos, el rendimiento en el sector rural se encuentra rezagado. Estas disparidades constituyen un reto central para el departamento en términos de equidad y calidad del aprendizaje.

Este escenario muestra la necesidad de orientar una política educativa en Antioquia hacia el fortalecimiento de la comprensión lectora, especialmente en las zonas rurales del departamento donde este rezago es mayor. Para esto, es fundamental continuar con el apoyo a la formación de los docentes, impulsar estrategias pedagógicas acordes al contexto, al igual que asegurar la disponibilidad de recursos de lectura adecuados en las diferentes instituciones educativas.

Mayor cantidad y criticidad de eventos de origen natural y una alta vulnerabilidad ante el cambio climático

Los eventos de origen natural en el departamento dejan visible las desigualdades territoriales existentes frente a la gestión del riesgo y la adaptación al cambio climático, dado que son los municipios con mayores condiciones de amenaza a desastres naturales y vulnerables al cambio climático, los que no cuentan con las capacidades necesarias para enfrentarlos.

Durante los últimos años, los eventos de desastre en Antioquia son cada vez más frecuentes e intensos, siendo el segundo departamento con más registros desde hace dos décadas, además de que su frecuencia se ha multiplicado por siete en la misma cantidad de tiempo, pasando de un promedio de 50 eventos anuales entre 1998 y 2007 a 357 entre 2019 y 2023, siendo un 93% de ellos de origen climático (inundaciones, deslizamientos, avenidas torrenciales), lo que evidencia una creciente vulnerabilidad ante el cambio climático. A esto se suma que, actualmente, 58 municipios están en amenaza alta o muy alta y 27 en amenaza media, lo que significa que son más susceptibles a eventos de origen natural.

Estos eventos de desastre suelen dejar grandes pérdidas materiales, dependiendo de su magnitud y las condiciones de riesgo de los territorios. Antioquia se ubica como el segundo departamento con mayores afectaciones a infraestructura por desastres naturales, con un total de 1.598 entre 2019 y 2023, viéndose principalmente afectado las vías terciarias, lo cual crea un aislamiento territorial que impide el desarrollo económico y social de las comunidades afectadas.



Todo lo anterior, sumado además a presiones hacia los ecosistemas como lo es la perdida de cobertura arbórea, son un reflejo de que Antioquia debe repensar la planificación territorial alrededor de la prevención de desastres y la adaptación al cambio climático, con especial énfasis en territorios alejados que presentan altas vulnerabilidades.

Una gestión de residuos sólidos sin visión a largo plazo

En Antioquia, el modelo actual de gestión de residuos sólidos está llegando a un punto crítico en términos ambientales y operativos, por lo cual es importante avanzar en alternativas que permitan reducir los residuos que terminan en los rellenos sanitarios, fomentando programas de economía circular que creen una cultura de la separación y el aprovechamiento.

En 2024, en Antioquia se dispusieron más de 1.619.540 toneladas de residuos sólidos, siendo la gran mayoría en rellenos sanitarios y en una menor cantidad en celdas transitorias y botaderos a cielo abierto. Sin embargo, para diciembre de 2024, el 43% de los municipios dependen de sitios de disposición final con una vida útil entre 3 a 6 años, y únicamente el 16% cuenta con sitios de disposición final con una vida útil mayor a 9 años.

La presión sobre la vida útil es aún más preocupante si se tiene en cuenta que, La Pradera, el principal relleno sanitario del departamento donde fueron llevados el 81% de los residuos dispuestos para 2024, tiene una vida útil proyectada hasta 2033. A su vez, Medellín, quien representó el 62% de los residuos dispuestos en La Pradera y el 45% de los residuos dispuestos en Antioquia en 2024, reportó una tasa de aprovechamiento de solo 14% en 2023 (Superservicios, 2024). Además de lo anterior, cerca del 90% de los municipios en Antioquia contemplan a La Pradera como un relleno de contingencia ante cualquier emergencia, ejerciendo aún más presiones ambientales sobre este.

Lo anterior da cuenta que los municipios de Antioquia deben reconfigurar sus modelos de gestión de residuos sólidos para evitar futuras crisis en un mediano plazo. La creación de una infraestructura adecuada para una recolección diferenciada y/o el aprovechamiento material y económico de los residuos es crucial para crear una cultura ciudadana de la separación.

La economía circular es un elemento clave que permitirá reducir los daños ambientales y sociales producto de la disposición actual de residuos sólidos, y al mismo tiempo que diversifica la economía y crea o mejora nuevas oportunidades de empleo.



Retos de Medellín 2026



Acceso a vivienda digna en zonas de vulnerabilidad y alto riesgo

Actualmente, las condiciones geográficas, demográficas, sociales y económicas presionan a que Medellín repiense la forma en que se garantizará el acceso a una vivienda digna para los ciudadanos que más lo necesitan. En este sentido, la tenencia y la regularización del suelo es de suma importancia para implementar mejoramientos de vivienda y Mejoramiento Integral de Barrios¹. El DAP (2025), señala que cerca de 129.000 viviendas se encuentran en polígonos de Mejoramiento Integral de Barrios (MIB), mientras que, de acuerdo con el Sistema de Seguimiento y Evaluación del POT (SSEPOT), cerca de 75.806 predios residenciales se encuentran en situación informal, los cuales pueden ser regularizados mediante el reconocimiento de edificaciones.

A su vez, la gestión del riesgo de desastres debe ser un factor crucial para ofrecer soluciones de vivienda digna. Esto debido a que las zonas con mayor amenaza por deslizamientos se sobreponen con los polígonos de MIB y otras áreas urbanas precarias y con baja capacidad de soporte.

De acuerdo con estudios de riesgo, una gran cantidad de viviendas deben ser reasentadas o invertir en obras de mitigación y estabilización de riesgo en las zonas que lo requieran. Los estudios preliminares de los macroproyectos de las transversalidades de Santa Elena y La Iguaná muestran que cerca de 3.392 viviendas se encuentran en zonas de riesgo no mitigable (reasentamiento) y 3.444 están en zona de riesgo mitigable (estabilización).

Lo anterior representa un indicador anticipado de la complejidad que implicará la implementación del macroproyecto del borde urbano rural nororiental, donde se concentra una alta proporción de áreas con amenaza alta por deslizamientos, pendientes críticas, superiores al 15% en algunos sectores, y condiciones sociales de alta vulnerabilidad. Por esto, se proyecta que el reasentamiento por riesgo y por obras derivadas de macroproyectos será un eje estructural de la transformación urbana de los próximos años.

Esto significa que la ciudad presenta el gran reto de ofrecer soluciones de vivienda y mejoramientos en zonas de baja amenaza por fenómenos naturales, por lo que los macroproyectos del río se posicionan como una gran oportunidad, especialmente en el norte. Es necesario también que las nuevas tipologías de vivienda en la ciudad tengan presente la adaptación al cambio climático, así como demás condiciones demográficas, económicas y sociales.

¹ El Mejoramiento Integral de Barrios busca mejorar las condiciones del hábitat (mejoramiento de vivienda, mitigación del riesgo, reasentamiento en sitio, reducción de los déficit en servicios, equipamientos y espacio público, adaptación al cambio climático, titulación y regularización de predios, entre otros) en estas zonas vulnerables mediante una caracterización y diagnóstico integral de la población que permita aterrizar soluciones basadas en evidencia, la participación comunitaria mediante asambleas o comités barriales, integración interinstitucional y acercamiento del estado a la comunidades que creen una relación más fuerte y directa.



Un modelo de gestión de residuos sólidos insostenible

Medellín se encuentra bajo un modelo de gestión de residuos que es ambiental, social y económicamente insostenible. Para evitar una crisis a futuro, es necesario avanzar en programas claros de economía circular, que fomente la separación en la fuente, el aprovechamiento y la valorización material y energética de los residuos, creando una cultura alrededor de la responsabilidad con el manejo y la reducción de residuos.

Para 2023, Medellín dispuso en el relleno sanitario La Pradera 683.257 toneladas de residuos sólidos, pero la tasa de aprovechamiento del servicio de aseo, según el Sistema Único de Información (SUI) de la Super-

intendencia de Servicios Públicos, no superó el 14% en ese año (Superservicios, 2024). Para 2024, el ingreso de residuos aumentó a 704.586 toneladas, aunque aún no se cuenta con cifras oficiales de aprovechamiento reportadas en el SUI, el Sistema de Indicadores Estratégicos de Medellín (SIEM) estimó una tasa de aprovechamiento del 20% sobre el total generado.

El informe de caracterización de residuos sólidos residenciales de la Alcaldía de Medellín, publicado en 2025, muestra que el 86% de los residuos sólidos generados en las viviendas son potencialmente aprovechables, siendo el principal los residuos orgánicos. A su vez, también señala que las comunas Doce de Octubre, Robledo y San Javier lideran en la generación de residuos aprovechables, seguidas por El Poblado y Buenos Aires.

De igual forma, se estima que cada habitante de Medellín genera en promedio 0,47 kilogramos de residuos sólidos al día, aunque es relevante ver las diferencias entre zonas de la ciudad: mientras que en la zona Nororiental la generación promedio diaria es de 0,45 kilogramos por persona, en la zona Suroriental asciende a 0,75 kilogramos, lo que implica una diferencia de 0,30 kilogramos diarios. Estas disparidades refuerzan la necesidad de adoptar estrategias diferenciadas de gestión de residuos, ajustadas a las condiciones socioeconómicas, físicas y demográficas de cada zona, para garantizar la eficiencia del sistema y avanzar hacia modelos de economía circular.

Finalmente, el informe también resalta la urgencia de avanzar en estrategias de corto y mediano plazo, pues el informe de caracterización alerta que, si Medellín continúa bajo las mismas prácticas actuales, para 2030 habrá ocupado el 68% de la capacidad del nuevo vaso La Piñuela en La Pradera. Lo anterior sin tener en cuenta que el relleno sanitario es usado por más de 40 municipios de Antioquia y que el 90% de los municipios dependen de este como única opción de disposición final ante cualquier contingencia (Antioquia Cómo Vamos, 2025).



Rezagos en la intervención y generación de espacio público que agudizan las brechas territoriales

A pesar de la importancia del espacio público en la vida cotidiana, este queda relegado a un segundo plano en la ciudad, pues se sobrepone con las demás problemáticas referentes a los usos del suelo, como lo son la demanda de vivienda y la falta de equipamientos e infraestructura para la prestación de servicios esenciales como la salud y la educación en las zonas más vulnerables de la ciudad, compitiendo en espacios que de entrada ya se encuentran densamente poblados.

Lo anterior ha ocasionado que la creación de nuevo espacio público en la ciudad haya estado rezagada durante los últimos años, pues en Medellín, entre 2014 y 2023, la población aumentó 212.606 personas, pero los metros cuadrados de espacio público efectivo por habitante únicamente aumentaron $0,61m^2$, lo que ubica a la ciudad lejos de la meta propuesta por el POT 2014 de 7 metros cuadrados.

Además, del rezago general a nivel distrital, el déficit de espacio público es una problemática altamente heterogénea en la ciudad, presentando una gran desigualdad en su distribución, especialmente en la zona Nororiental, que cuenta con un promedio de $2,91m^2$, mientras que la Suroriental presenta $7,17m^2$. Dicha problemática está presente desde años atrás, pues entre 2013 y 2023 el espacio público en la zona Nororiental ha aumentado solamente, en promedio, $0,54m^2$.

En este orden de ideas, la problemática de espacio público en Medellín se centra en la necesidad de cerrar las brechas entre las diferentes zonas de la ciudad, especialmente entre el nororiente y el sur, con espacios públicos inclusivos, accesibles y de calidad para los ciudadanos.

A su vez, se resalta la importancia del espacio público no únicamente desde su función social, que es la de, principalmente, ser un espacio de encuentro y recreación, sino también desde su función ambiental, pudiendo ser una herramienta clave para la mitigación del riesgo, así como de preservar la fauna y la flora de la ciudad funcionando como corredores ecológicos entre los cerros tutelares del distrito; desde una función cultural, siendo un elemento clave para la protección de los bienes de interés cultural, la preservación del patrimonio y permitir las expresiones culturales; y finalmente, pudiéndose integrar orgánicamente con algunos equipamientos distritales, teniendo la capacidad de ofrecer espacios de encuentro y proveer servicios a la ciudadanía.



Violencia cotidiana y fortalecimiento del control territorial

En 2025, Medellín presentó un panorama de seguridad dual caracterizado por la mejora en indicadores de alto impacto frente a la persistencia del crimen organizado y de la violencia interpersonal.

Si bien el Distrito mantuvo la tasa de homicidios en mínimos históricos (13,1 por cada 100 mil habitantes), redujo los hurtos a niveles prepandemia y logró estabilizar la victimización en un 24% —frenando la tendencia alcista observada entre 2020 y 2022—, las principales preocupaciones de la ciudadanía en materia de seguridad continúan siendo los hurtos (29%), la drogadicción (20%), el tráfico de drogas (6%) y las pandillas (10%).

Las estructuras criminales continúan fortaleciendo sus finanzas y control territorial a través de un portafolio ilícito que abarca desde el microtráfico y la extorsión hasta la explotación sexual, el desplazamiento forzado y el lavado de activos. Esta influencia ha consolidado una ‘gobernanza criminal’ que, sin sustituir al Estado, ejerce un control paralelo y regula la vida cotidiana en diversas comunidades.

Paralelamente, la violencia en la ciudad ha mutado, revelando una crisis de intolerancia donde el deterioro la cultura ciudadana y la incapacidad para resolver conflictos mediante el diálogo es hoy tan letal como el crimen organizado. Los homicidios asociados a problemas de convivencia, violencia de género e intrafamiliar representan el 47% del total; específicamente, las muertes por convivencia aumentaron un 30% respecto al año anterior, superando en volumen a las vinculadas directamente a estructuras criminales.

Esta fragilidad del tejido social se hace evidente en los más de 11 mil casos de violencia de género e intrafamiliar reportados al SIVIGILA en 2024 y en el hecho de que 1 de cada 5 personas afirmó haber presenciado acoso sexual en el espacio público, confirmando que, para muchas mujeres, niños, niñas y adolescentes, ni los hogares ni las calles operan como entornos protectores efectivos.

Medellín enfrenta el desafío de sostener la reducción en homicidios sin depender de pactos entre criminales, al tiempo que se interviene con urgencia la violencia estructural y cotidiana. Construir una ciudad más segura requiere, más allá del control, fortalecer los vínculos sociales, recuperar la confianza institucional y consolidar una convivencia basada en el respeto, la justicia y el reconocimiento mutuo.



El envejecimiento poblacional implica una mayor inclusión social y económica del adulto mayor

El acelerado descenso de la tasa de natalidad ha provocado el envejecimiento poblacional del distrito y tal como lo indican las proyecciones este se seguirá acentuando en los próximos años. Ante este fenómeno la ciudad debe plantearse un nuevo modelo de gestión social orientado a incluir económica y socialmente a los adultos mayores que considere también la provisión de servicios de cuidado que esta población requiere.

Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2022, el 55% de las personas manifestó no sentirse preparado económica y financieramente para enfrentar la vejez, además, un 38% de las personas consideran que los servicios de cuidado que vaya a necesitar durante su vejez deben ser asumidos por las familias y un 23% considera que deben ser suministrados por el Estado, mientras que un 31% no lo ha pensado.

En 2018, aproximadamente dos de cada diez personas en Medellín eran menores de 15 años, mientras que una de cada diez era mayor de 65 años, las proyecciones indican que en el 2042 esta relación se invertirá, dos de cada diez personas serán mayores de 65 años y una de cada diez personas será menor a los 15 años. El envejecimiento también se puede evidenciar en la edad promedio de la ciudad, según las estimaciones del Departamento Administrativo de Planeación la edad promedio en Medellín pasó de ser 33,2 años en 2005 a 36,6 años en 2024.

En términos demográficos el envejecimiento poblacional se traducirá en un aumento de la dependencia económica, entiéndela como la relación entre la población dependiente (menores de 15 años y mayores de 65 años) con respecto a la población activa (entre 15 años y 64 años). Según las proyecciones poblacionales el índice de dependencia económica pasará de un 42% a un 47% en 2042.

Ante este panorama, la migración que ha venido recibiendo la ciudad en los últimos años juega un rol fundamental en términos demográficos. De acuerdo con los registros de Migración Colombia, se estima que para 2025 en Medellín hay 241.742 venezolanos con vocación de permanencia, el 24% de estos es menor de 18 años, lo cual representa una contribución importante al bono demográfico de la ciudad. No obstante, es necesario fortalecer la integración económica de esta población y mejorar sus condiciones de vida, pues de acuerdo con los datos de pobreza del DANE existen brechas importantes entre la población venezolana y la población general. Mientras que el 33% de los migrantes venezolanos que viven en Medellín A.M está en condición de pobreza monetaria, el 19% de la población general está en esta condición.



Cada vez hay menos niños, pero estos se ven especialmente afectados por condiciones de vulnerabilidad

En 2024, Medellín alcanzó una tasa de fecundidad de 0,9 (menos de un hijo en promedio por mujer), lo cual está muy por debajo de la tasa de 2,1 hijos por mujer, que es la tasa teórica de reemplazo en la que una población se mantendría estable.

Entre el 2023 y el 2024 la cantidad de nacimientos se redujeron en un 9%, además, se espera que la situación se acentúe cada vez más, de acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín 2025, solo el 9% de las personas planean tener un hijo en los próximos 3 años, y el 79% ha descartado la idea de tener hijos próximamente. Tanto el hecho de tener otras prioridades personales y profesionales (41%) como los motivos económicos (38%) se configuran como los principales motivos para decidir no tener hijos entre las personas más jóvenes (entre 18 y 25 años). También hay un 30% de jóvenes que indican que simplemente prefieren no tener hijos.

Por otro lado, se estima que solo 1 de cada 3 hogares en Medellín cuenta con un menor de edad dentro de su composición. Al examinar las condiciones de estos hogares se identifica que aproximadamente el 41% de los hogares con menores de edad están a cargo de una mujer sin cónyuge y más del 60% de estos hogares habitan en viviendas de estrato 1 o 2. Estas condiciones son relevantes pues según el DANE, en Medellín la incidencia de pobreza es mayor para las mujeres jefes de hogar que para los hombres (25% frente a 19%).

Actualmente se estima que los menores de 18 años representan un 21% del total de la población y en el 2042 solo representarán el 15%. Un asunto importante es que el 39% de los menores de 18 años de la ciudad se encuentran en condición de pobreza monetaria, o visto de otra manera, aproximadamente el 36% de las personas en condición de pobreza monetaria tiene menos de 18 años.



Un sistema educativo con pérdidas en cobertura, permanencia, que no ha logrado mayores avances en calidad

Según el Informe de Calidad de Vida de Medellín Cómo Vamos (2024), la ciudad había venido presentando falencias en materia de infraestructura educativa. En respuesta a esta situación, la actual administración destinó \$1,2 billones durante el cuatrienio para el mejoramiento de la infraestructura escolar y, entre 2024 y 2025, se han intervenido 264 sedes educativas que requerían algún tipo de adecuación.

Estas falencias que se presentaban en infraestructura solo mostraban una parte de los desafíos estructurales que enfrenta el sistema educativo de Medellín. Los estudiantes continúan enfrentando barreras en el acceso, la permanencia y la calidad educativa. En este contexto, la tasa de cobertura bruta mantiene una tendencia decreciente desde 2020, año marcado por los efectos de la pandemia del COVID-19. Esta reducción ha sido mayor para los grados de secundaria, donde la cobertura alcanzó en 2024 su nivel más bajo, alcanzando un 98%, en contraste con el 105% registrado en 2022 y el 103% observado en 2023. Este comportamiento puede asociarse con los altos niveles de repitencia, extraedad y deserción que se vienen evidenciando desde 2019, siendo la secundaria el nivel educativo que presenta los mayores niveles en estos tres indicadores.

Por último, a estas dificultades se suman los retos persistentes en términos de calidad educativa. Aunque entre 2023 y 2024 el puntaje global promedio de Medellín en las pruebas Saber 11 aumentó en 3 puntos porcentuales, el desempeño de la ciudad continúa por debajo del observado en otras ciudades principales del país. Para 2024, Medellín registró un puntaje promedio de 256 puntos, mientras que Barranquilla alcanzó 259, Cali 266 y Bogotá 272 puntos. Estas brechas en el rendimiento académico también se reflejan en la percepción ciudadana. Según la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín Cómo Vamos (2024), la satisfacción con la educación pública que reciben niños y jóvenes disminuyó en 10 puntos porcentuales entre 2023 y 2024, pasando del 74% al 64%, lo que evidencia una creciente preocupación por la calidad del sistema educativo en la ciudad.



La formación de capital humano enfrenta cada vez más dificultades para cumplir con las necesidades del mercado laboral

Frente a los cambios demográficos —con una menor proporción futura de niños y adolescentes— y a las dinámicas actuales del sistema educativo, surge el reto de considerar el capital humano que se está formando, el que se formará y el stock disponible. Aunque la satisfacción educativa ha disminuido en los últimos años (de 84% en 2021 a 64% en 2025), persisten brechas importantes en las competencias adquiridas por los estudiantes: uno de cada tres se gradúa sin alcanzar las competencias mínimas en lectura. Si bien estos hacen referencia a retos de educación las implicaciones directas se encuentran en el mercado laboral y el capital humano disponible.

Adicionalmente, la matrícula en educación superior, especialmente en programas técnicos y tecnológicos, viene cayendo, mientras continúan existiendo vacantes laborales que no logran cubrirse. Según las cifras del Servicio Público de Empleo, en 2024 en el Área Metropolitana, de aproximadamente 2 millones de

puestos de trabajo ofertados, solo el 40% encontró candidatos idóneos. Este escenario plantea interrogantes sobre la capacidad futura de la ciudad para atender las necesidades del aparato productivo y acoger nuevas industrias y empresas en el Valle de Aburrá. Si bien las estrategias de formación de corta duración y los cursos con enfoque STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) constituyen una respuesta en el corto y mediano plazo, resulta fundamental identificar las necesidades de largo plazo de la ciudad y definir las acciones necesarias para cerrar de manera estructural estas brechas.

La informalidad laboral no cede terreno

Medellín A.M. registró una tasa de informalidad del 38,8%, siendo la cuarta más baja a nivel nacional entre ciudades y áreas metropolitanas, superada únicamente por Bogotá (33%), Manizales A.M. (36,5%) y Tunja (38,5%). No obstante, aunque la ciudad ha logrado mejorar en otros indicadores, como el nivel de ingresos y una tasa de desocupación promedio inferior a la nacional, resulta relevante destacar que, a pesar del aumento en el número de personas ocupadas, la informalidad se ha mantenido alrededor del 38% durante los últimos cuatro años.

En este sentido, el reto se encuentra en que el crecimiento de la ocupación esté acompañada de una reducción sostenida de la informalidad, con el fin de garantizar el acceso a la seguridad social, fortalecer



el recaudo del sistema de seguridad social y mejorar las condiciones laborales y de calidad de vida de la población ocupada.

Presiones que empiezan a verse reflejadas en el costo de vida

En los últimos años, Medellín ha experimentado un incremento significativo en los precios, lo que ha llevado a que distintos medios de comunicación² y estudios³ la señalen como una de las ciudades más costosas para vivir en Colombia. Entre 2021⁴ y noviembre de 2025, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para Medellín acumuló un crecimiento del 36,7%, cifra ligeramente superior al promedio nacional (36,3%) y similar a la registrada en Bogotá (36,7%). Este comportamiento se explica, en gran medida, por los aumentos en rubros que tienen un peso elevado dentro de la canasta básica de los hogares y cuya contribución a la inflación ha sido considerable. En particular, los grupos de alojamiento, agua, electricidad, gas y otros servicios aportaron 2,2 puntos porcentuales a la inflación anual reportada de 5,4% a mayo de 2025, mientras que alimentos y bebidas no alcohólicas, así como restaurantes y hoteles, contribuyeron con 0,8 puntos porcentuales cada uno.

Más allá del comportamiento agregado del IPC, la dinámica de los precios tiene implicaciones directas sobre la calidad de vida de los hogares. De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana, en 2025 el 41,6% de ciudadanos considera que sus ingresos no son suficientes para cubrir el total de sus necesidades básicas. En este sentido, un mayor nivel de inflación puede traducirse en una reducción de los ingresos reales cuando el crecimiento de los precios supera los incrementos nominales de los salarios.

Este fenómeno tiene efectos más severos sobre la población de menores ingresos. A nivel nacional, entre 2019 y 2024, mientras la inflación promedio general fue del 39,3%, para la población en condición de pobreza esta alcanzó el 42,2%. Estas diferencias responden a la estructura del gasto de los hogares más vulnerables, cuyo consumo se concentra en rubros de mayor peso relativo dentro de la canasta básica, como los alimentos y la vivienda. En este contexto, el aumento sostenido en los precios de los alimentos —que entre 2019 y 2024 registraron un incremento acumulado del 71% a nivel nacional— tiene implicaciones directas sobre el acceso a una alimentación suficiente, variada y saludable, especialmente para los hogares de bajos ingresos.

² Zapata (2025, 11 de junio), Medellín ya está más cara que Bogotá: precios de los arriendos son 7% más altos. El Colombiano. <https://www.elcolombiano.com/negocios/vivir-en-medellin-cuesta-mas-que-en-bogota-precios-de-arriendos-son-mas-altos-DE27675600>.

³ Galvis-Aponte, L. A., Ortega-Arrieta, A. I., & Rivera-Zárate, A. M. (2025). Disparidades regionales en los precios de arrendamiento de vivienda urbana en Colombia: una evaluación empírica (Documentos de Trabajo Sobre Economía Regional y Urbana, No. 335). Banco de la República. <https://doi.org/10.32468/dtsru.335>

⁴ Tomando el IPC a diciembre de dicho año.



Si bien existen percepciones generalizadas sobre el encarecimiento de la vivienda y los arriendos en Medellín, es importante reconocer que estas dinámicas no siempre se reflejan con total claridad en los indicadores tradicionales de precios, lo que limita la capacidad de observar de manera precisa la magnitud del fenómeno. Como lo mencionó un estudio del Banco de la República, Medellín a 2024 ocupó el primer lugar como la ciudad con el precio de los arrendamientos más altos. No obstante, la presión sobre estos rubros sigue siendo un elemento central en la discusión sobre el costo de vida en la ciudad, dada su incidencia directa en el presupuesto de los hogares. Otro de los argumentos inherentes del encarecimiento de la vivienda parte del déficit cuantitativo y las variaciones en los precios del metro cuadrado en la ciudad. Solo entre 2022 y 2023, para el estrato 2, se registró un aumento del 22% en el precio del metro cuadrado en Antioquia, mientras que para los demás estratos estuvieron en el orden del 10,8% al 17,4%, exceptuando el estrato 1⁵.

En este escenario, el reto para la ciudad va más allá de atribuir la inflación a factores externos o a decisiones de política de orden nacional. El desafío consiste en comprender las causas específicas del aumento de los precios en los sectores que tienen mayor peso en el gasto de los hogares y en diseñar estrategias de mitigación que reduzcan sus efectos sobre la calidad de vida, los ingresos reales y la pobreza. Este análisis adquiere mayor relevancia al considerar los posibles efectos del reciente incremento del salario mínimo del 23%, en un contexto donde los mecanismos de indexación⁶ de precios pueden incidir en los ajustes de servicios públicos, vivienda, transporte y bienes básicos. El objetivo debe ser que los aumentos en los ingresos se traduzcan en mejoras reales del poder adquisitivo, evitando que la inflación termine erosionando los avances en bienestar y movilidad social.

Crisis del sistema de salud que se ve reflejada en la calidad y pertinencia de los servicios de atención

El sistema de salud en el Distrito de Medellín, además de verse condicionado por la creciente deuda de las EPS a los hospitales y clínicas, enfrenta una presión demográfica creciente: por ser la capital del segundo departamento con más población en el país y el centro geográfico del Valle de Aburrá, se facilita la concentración de una amplia población flotante en el municipio. Adicionalmente, a febrero de 2025 habían llegado a la ciudad aproximadamente 331 mil desplazados (Registro Único de Víctimas), y 239 mil migrantes (Migración Colombia a diciembre de 2024). Dicha carga poblacional se refleja en la concentración de casi el 70% de las atenciones en salud del departamento en un solo municipio (Plan Territorial de Salud de Medellín 2024-2027 de la Alcaldía de Medellín).

5 Coordenada Urbana, Camacol Antioquia, Metro Cuadrado, 2023

6 Mecanismo mediante el cual los precios, tarifas o costos se ajustan automáticamente tomando como referencia el aumento de otro indicador, como la inflación o el salario mínimo.



En este contexto, la situación del sistema de salud se refleja cada vez más en implicaciones directas en la calidad de vida de los habitantes del Distrito. Entre 2023 y 2025 aumentó el porcentaje de ciudadanos que deben esperar más de 20 días para su cita médica, pasando de 27% a 29% (Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín – Medellín Cómo Vamos). Asimismo, las tutelas en salud registraron su máximo histórico en 2024 en el país y en Medellín, con un total de 24.957. El 37% de las tutelas son por práctica oportuna de procedimiento médico, seguido por la entrega oportuna de medicamentos o insumos con 32%, y la asignación de citas médicas (30%). De hecho, entre las principales ciudades del país, Medellín es la capital con mayor número de tutelas por cada mil habitantes, registrando 9.88 (Estadísticas de la Corte Constitucional de Colombia).

En general, la insatisfacción con los servicios de salud por parte de la ciudadanía aumentó del 19% en 2019 al 29% en 2025 (Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín – Medellín Cómo Vamos). En este contexto, el acceso efectivo al derecho a la salud se enfrenta a un sistema inequitativo, mientras los estratos altos acceden a servicios más ágiles, los estratos bajos enfrentan barreras materiales y una menor solicitud de citas. De forma tal que, se requieren intervenciones locales que busquen disminuir estas brechas y contener los efectos de la crisis nacional en la calidad de vida de los habitantes del Distrito.

Persistencia de la inseguridad alimentaria y aumento de la desnutrición crónica

Entre 2021 y 2024 el Distrito de Medellín alcanzó picos históricos en hogares en inseguridad alimentaria moderada o severa, pasando de 14% en 2019, a 27% en 2021 y 22% en 2024. Además, si se considera la inseguridad alimentaria leve, el 57% de los hogares no cuentan con la cantidad ni calidad apropiada de alimentos en el último año (Cálculos propios del Departamento Administrativo de Planeación - Alcaldía de Medellín).

Si bien la administración ha puesto en marcha programas de contención y se ha registrado una disminución en la desnutrición aguda entre 2023 y 2024, pasando de 1,1% a 0,9% de los menores de cinco años tamizados, la desnutrición crónica, la cual es resultante de amplios períodos de privación nutricional, no muestra mejoría.

Durante 2024 se registró el número más alto de casos de desnutrición crónica en primera infancia desde que se tiene registro (2012). El 9,4% (9.209) de los 97.628 infantes tamizados presentaron retraso en talla, lo que representa un aumento frente al 8,7% reportado en 2023, que hasta entonces era la cifra más elevada. A julio de 2025 se han identificado 7.717 menores en esta condición, 8,8% de los tamizados. Dicho aumento refleja la vulnerabilidad alimentaria de cada vez más hogares en el Distrito, los cuales no consiguen garantizar los nutrientes necesarios para el crecimiento sano de sus menores. Son necesarias acciones decididas que aborden las secuelas de la inseguridad alimentaria tanto en infantes como en el resto de la población.



Recuperación de la confianza

Tras alcanzar mínimos históricos durante el periodo 2020-2023 —los más bajos en 19 años de medición—, los indicadores de confianza ciudadana experimentaron una recuperación notable en 2024 y 2025. Bajo la nueva gestión, la imagen favorable del alcalde se duplicó, ascendiendo del 35 % en 2023 al 74 % en 2025. En sintonía con este repunte, la percepción positiva de su gestión escaló del 28 % al 61 %.

Esta tendencia favorable se extendió también al conglomerado público, cuyas entidades incrementaron su favorabilidad en un promedio de 6 puntos porcentuales (p. p.) en el mismo lapso. Sin embargo, este repunte no ha sido uniforme. Mientras que entidades como EPM (+14 p.p.), INDER (+10 p.p.) y EMVARIAS (+8 p.p.) consolidaron una favorabilidad sobresaliente (del 81%, 89% y 96%, respectivamente), aquellas entidades con mayor contacto crítico con el ciudadano - Metrosalud (60%), Comisarías de Familia (61%), Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (63%) - registraron un aumento promedio de apenas 2 p.p.

El panorama general revela que, si bien Medellín ha recuperado la percepción positiva hacia su mandatario, la confianza institucional sigue siendo moderada. Aunque la Alcaldía lidera los niveles de confianza (40 %) —superando a la Gobernación de Antioquia (34 %), los medios de comunicación (27 %) y el Concejo Municipal (26 %)—, el dato de fondo es preocupante: aproximadamente la mitad de la ciudadanía desconfía de sus instituciones.

Esta crisis de credibilidad es aún más aguda frente a los estamentos nacionales, donde el Gobierno Nacional (15%) y el Congreso de la República (13%) registran niveles de confianza críticos. Un claro ejemplo de este fenómeno es la crisis de confianza en el sistema de justicia. En Medellín, el 45 % de quienes requirieron justicia se declara insatisfecho con el sistema, una cifra que explica por qué el 54 % de las víctimas de delitos prefiere no denunciar. Esta desmotivación ciudadana es de carácter estructural: la mitad de la población percibe que la denuncia es un trámite infructuoso. Dicha percepción tiene un correlato alarmante en la realidad judicial: según la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ), el índice de impunidad alcanza el 93 % en casos que son archivados en etapa de indagación.

En consecuencia, el desafío estratégico para Medellín no es solo sostener la favorabilidad de una figura política, sino transferir ese capital de confianza hacia las instituciones. Cerrar la brecha de eficiencia en las entidades rezagadas, combatir la impunidad y rehabilitar la percepción de la justicia son tareas inaplazables para fortalecer el tejido democrático. Si bien la ciudad ha logrado revertir la tendencia al deterioro en los últimos dos años, el camino por recorrer es aún largo: los niveles de confianza y legitimidad institucional todavía se sitúan por debajo de los registros prepandemia.



Nuestros informes para consulta



Haz clic en cada título para conocer la información completa de cada tema.



- [Calidad de Vida de Antioquia](#)
- [Calidad de Vida de Medellín](#)
- [Dinámica Laboral](#)
- [Violencias Basadas en Género](#)
- [Contravenciones](#)
- [Movilidad Humana](#)
- [Cultura Cómo Vamos](#)
- [Embarazo Adolescente](#)
- [Autonomía económica de las mujeres](#)
- [Vivienda](#)
- [Primera Infancia](#)
- [Turismo Extranjero](#)
- [Bajo Cauca, presente y futuro de la subregión](#)
- [Encuesta de Percepción de Urabá](#)

ANTIOQUIA

cómo
movamos



MEDELLÍN

cómo
movamos



@Antioquiacomovamos

@Medellíncomovamos



www.Antioquiacomovamos.org



www.Medellincomovamos.org